

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2° Juzgado Civil de Valdivia
CAUSA ROL : C-1762-2024
CARATULADO : HEINSOHN/FISCO DE CHILE-CDE

Valdivia, catorce de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS:

En el folio 1, don **JORGE LUIS HEINSOHN HUALA**, pensionado, domiciliado en calle Don Bosco N°2.475, comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, persona jurídica de derecho público, representado por Natalio Vodanovic Schnacke, Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, ambos con domicilio en calle Independencia N°630, oficina 311, Valdivia, pretendiendo la suma de \$200.000.000, con reajustes e intereses desde la notificación de la demanda y hasta el efectivo pago, o la suma que el tribunal determine de acuerdo al mérito del proceso, con costas, a título de indemnización de perjuicios morales.

Fundamentó su pretensión indicando que, para la época de su detención, prisión y tortura, era un joven de 18 años, que residía con sus padres y hermanos en la comuna de La Unión.

Que fue reconocido como víctima calificada por la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N°1040, del año 2003, ocupando el número 11.096 de dicho registro.

El día 13 de septiembre de 1973, su casa fue allanada sin orden judicial por personal de Carabineros de Chile. La puerta fue derribada, sin tener tiempo para reaccionar, y tanto él como su padre fueron sacados a la fuerza, apuntados con armas de fuego, y golpeados con puños y patadas. Posteriormente, fueron arrastrados hasta el jardín, donde los arrojaron al suelo con los rostros presionados contra la tierra y los brazos extendidos, mientras escuchaban los gritos y órdenes de los carabineros.

Durante el allanamiento, los carabineros destruyeron muebles y enseres del hogar, incluidos objetos de gran valor sentimental, en busca de supuestas armas. Sin embargo, la búsqueda resultó infructuosa, pues no encontraron nada, pero se ejercieron una violencia extrema contra las pertenencias familiares. Manifestó que sintió impotencia y vulneración ante la destrucción y la falta de humanidad de los agentes del Estado.

Tras el allanamiento, fue trasladado en un jeep particular hasta la comisaría de La Unión, donde fue sometido a crueles tratos. Recibió golpizas de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ

pies y puños, culatazos en la espalda y costillas, siendo amenazado de muerte en todo momento. Asimismo, le cortaron el cabello con un cortaplumas como forma de humillación. Cada golpe y cada acto de vejación tenía el destino de quebrar su espíritu y sembrar le miedo.

Relató que, paso la noche encerrado en la comisaría y fue liberado al día siguiente con un ojo amoratado y lesiones considerables en todo el cuerpo. Se le ordenó estrictamente presentarse en la Comisaria de Valdivia, lo que intentó cumplir en los dos días siguientes. Durante ese periodo, viajó con gran dificultad, soportando el dolor de sus heridas y el miedo constante de ser detenido nuevamente. Al llegar a Valdivia, se presentó los dos días ante la comisaría, pero sin obtener respuesta alguna. Al tercer día, fue trasladado junto a otros prisioneros desde la Unión hasta Valdivia, en un furgón de Carabineros. En la Comisaria de Valdivia, tres de los prisioneros quedaron retenidos, mientras que el resto, incluido el, fueron entregados a los militares. La incertidumbre y el temor se apoderó de él, mientras esperaba su destino, consciente de que su vida dependía de personas que no mostraban piedad ni compasión.

En la Comisaría de Valdivia fue interrogado por el fiscal de Carabineros de apellido Rodríguez, quien, con improperios y amenazas, le exigía que confesara. Con un tono agresivo y despectivo, lo acusaba constantemente, preguntándole por armas y presionándolo para que revelara nombres de miembros de la izquierda. Cada pregunta iba acompañada de insultos. Ese mismo día fue trasladado encadenado y completamente incomunicado a la cárcel pública de Isla Teja. Pasó varios días en los que estuvo en aislamiento antes de ser trasladado al cuartel de la IV División del Ejército, donde fue sometido nuevamente a interrogatorios con crueles métodos de torturas que incluyeron agresiones físicas como psicológicas. En ese lugar, se reencontró con su padre, quién también permanecía incomunicado. Ambos fueron llevados ante el consejo de guerra, enfrentando acusaciones infundadas en un proceso judicial injusto.

Después de permanecer aproximadamente un mes detenido, acusado de espionaje y otros delitos sin fundamento, fue absuelto por el Consejo de Guerra. Sin embargo, su padre fue condenado a tres años y un día de presidio, lo que generó un quiebre significativo en su familia.

Menciono que recuperó su libertad el día 20 de octubre de 1973, marcando el inicio de un nuevo tormento: ser un expresidiario político. Perdió la oportunidad de continuar con sus estudios, viéndose obligado a trabajar para contribuir al sustento familiar, ante la ausencia de su padre, que estaba preso.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ

Su madre y hermanos también sufrieron las consecuencias de su detención, enfrentando discriminación y estigmatización social. La comunidad los observaba con desconfianza y el rechazo era palpable en cada interacción cotidiana. Se convirtió en el sostén de la familia, trabajando de cualquier empleo que pudiese encontrar, desde trabajos de la construcción hasta labores agrícolas. Sin embargo, la discriminación no solo fue social, sino también laboral, pues muchos empleadores se mostraron reacios a contratar a un expresidiario político, ya fuera por temor a represalias o por prejuicios arraigados.

Finalmente indicó que el impacto psicológico de la tortura y la detención, dejaron cicatrices profundas en su alma. Las noches fueron especialmente difíciles, plagadas de pesadillas y recuerdos dolorosos. Las dificultades económicas, la pérdida de oportunidades y el estigma social fueron desafíos constantes que tuvo que enfrentar día a día, recordando la injusticia y brutalidad del régimen que le tocó vivir.

En el folio 9, contesto la demanda oponiéndose excepción de reparación, alegándose la improcedencia de la indemnización pretendida por el actor por haber sido indemnizado en conformidad a la ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas que han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, a saber: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) reparaciones simbólicas. Estimó que, mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca la reparación moral y patrimonial de las víctimas; y la acción interpuesta está basada en los mismos hechos y pretende indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias.

En subsidio, dedujo excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita ésta, se rechace la demanda en todas sus partes. En subsidio, para el evento que se estimare que esta norma no es aplicable al caso de autos, opuso excepción de prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la de notificación de la presente demanda, ha transcurrido con creces el plazo que establece el citado artículo



2515 del Código Civil.

Luego, para el evento que se estime que la acción es imprescriptible y compatible con la indemnización obtenida por el actor, hizo presente que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral resulta excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia.

En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, sostuvo que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Finalmente, hizo presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y, además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

En los folios 14 y 16 se evacuaron los trámites de réplica y dúplica, oportunidad en que el demandante y la demandada profundizaron en los argumentos expuestos en sus libelos de demanda y contestación, respectivamente.

En el folio 21, se recibió la causa a prueba y en el folio 36, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I) En cuanto a la excepción de reparación:

PRIMERO: Que esta excepción se fundó en que el actor fue indemnizado con ocasión del otorgamiento de pensiones de reparación conforme a la ley 19.123 y otras prestaciones que indica en su contestación, argumentación que, como se ha sostenido por los tribunales superiores y la jurisprudencia en general de forma uniforme, contradice la normativa internacional, específicamente el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el deber de otorgar una reparación integral por violaciones a los derechos humanos, norma que resulta vinculante a la luz de lo preceptuado en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución.

Lo anterior, atendido que el Derecho interno sólo es aplicable si no está en contradicción con esa preceptiva, de modo que la responsabilidad del Estado siempre queda sujeta a las reglas del Derecho internacional.

Por otro lado, la normativa invocada por el Fisco no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización que aquí se persigue y no se puede suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ

víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado.

Así, ello no supone una renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia por los medios que autoriza la ley, pues la única limitante de quienes reclaman un daño como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento y la relación con la víctima para plantear su pretensión.

II) En cuanto a la excepción de prescripción:

SEGUNDO: Como igualmente ha fallado en forma reiterada la Excm. Corte Suprema (Rol N°14.622-21), las acciones civiles tendientes a obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados encuentran su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en su establecimiento normativo en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagran la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos, normas que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de Derecho interno.

Por esta razón, no resultan aplicables a estos efectos las normas de Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios, pues ellas contradicen lo dispuesto en la normativa internacional.

Lo anterior constituye un lugar común de la jurisprudencia sobre la materia, de modo que innecesario se vuelve mayor análisis sobre el punto.

III) En cuanto al fondo:

TERCERO: Con la prueba documental acompañada en el folio 30, y la testimonial, cuya acta se lee en el folio 31, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

1.- Que Jorge Luis Heinsohn Huala, fue detenido desde el 13 de septiembre hasta el 20 de octubre del año 1973, permaneciendo detenido en dicho lapso en la Comisaría de La Unión, 1° Comisaría de Valdivia y en la Cárcel de Valdivia, con un tiempo total de detención de 1 mes y 7 días. (copia digital timbrada de carpeta confidencial del Instituto Nacional de Derechos Humanos, copia de certificado de Gendarmería de Chile del Centro de Detención Preventiva de Valdivia, ambos de folio 30, además de la prueba



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ

testimonial).

2.- Que la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura calificó al demandante como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, con el número 11.096. (Nómina de personas reconocidas como víctimas Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de folio 30).

Concurre a las conclusiones anteriores que el Fisco de Chile no discutió los hechos dañosos que sirven de basamento a la demanda indemnizatoria planteada, como tampoco el régimen de responsabilidad civil del Estado en el cual se funda la acción civil impetrada.

CUARTO: Como se señaló, la calidad de víctima del actor de violencia por parte de organismos y funcionarios estatales surge de la nómina de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, donde bajo el Nro. 11.096 se le reconoce como tal (folio 30). A ello, se suma la prueba testimonial consistente en declaración de don Manuel Gastón Ulloa Muñoz y de don Manuel Francisco Chaura Barrientos, quienes confirmaron lo expuesto por él en su libelo, en cuanto relatan sobre el hecho de la detención, los apremios ilegales y sus padecimientos.

Refrenda, igualmente, lo anterior el hecho de ser el actor titular de los beneficios que instituyeron las Leyes N°19.992 y N°20.874, conforme a lo expresado por el Fisco al contestar la demanda.

QUINTO: Se acompañó, además, en orden a acreditar la existencia de daño, con el instrumento de folio 30 que corresponde al informe psicológico emanado del Servicio de Salud de Valdivia, Programa PRAIS, el cual concluyó: *"A partir de la entrevista clínica, se pueden apreciar indicadores de daño psicológico como consecuencia de la detención y los sucesos de tortura física y psicológica vivenciados junto a su padre durante la prisión política. Es dable señalar, que esto significó un quiebre en su proyecto de vida, perdiendo sus estudios y la posibilidad de obtener un trabajo al ser víctima de discriminación y estigmatización, lo cual interfirió en su desarrollo individual. En este sentido, se evidencian síntomas disociativos en su relato que responden a un deseo de olvidar los hechos represivos, pero que le ha funcionado como mecanismo de superación para su vida actual".*

Lo anterior da cuenta de la existencia de daño psicológico, con secuelas que aún permanecen, aspectos que también son referidos por los testigos.

En lo pertinente, don Manuel Gastón Ulloa Muñoz, declaró al punto primero que don Jorge Heinsohn, fue detenido en septiembre del año 1973 por personal de Carabineros y del Servicio de Inteligencia Militar, quienes fueron a su casa, la allanaron, echando abajo la puerta y rompiendo todas sus cosas, en



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ

la búsqueda de armas. Después, lo llevaron a la Comisaría de La Unión, donde fue torturado cruelmente, lo sentaron en una silla, lo amarraron y golpearon en sus oídos con ambas manos, dejando su rostro amoratado. Posteriormente, fue llevado a la Cárcel de Valdivia, donde siguieron las interrogaciones y torturas, porque lo acusaban de comunista, y le preguntaban por armamento, lo cual era falso ya que no poseía armamento alguno. Señala que Jorge Heinsohn tenía 18 años a la época de su detención, cuando fue detenido en conjunto con su padre, quién fue enviado al exilio.

Al punto segundo declaró, que las consecuencias físicas de la tortura que le aplicaron a don Jorge Heinsohn, lo dejaron parcialmente sordo, por los golpes, sumados a las secuelas psicológicas, que fueron las más duras, ya que por las noches no puede dormir recordándose cuando lo torturaban. Agrega que lo quebraron psicológicamente porque se volvió alguien callado, tras la prisión de su padre y posterior exilio, debiendo trabajar para mantener a su madre y hermanos.

Por su parte, don Manuel Francisco Chaura Barrientos, declaró al punto primero que el 13 de septiembre de 1973, que don Jorge fue llevado a la Cárcel de Isla Teja, tras ser detenido por motivos políticos por personal de carabineros de La Unión, luego de haber sido allanada su casa. Relata que don Jorge Heinsohn sufrió el corte de su cabello, golpes y que le aplicaron corriente, quedando muy golpeado, con los ojos negros y sin poder mantenerse de pie. Afirmó que para la época de su detención don Jorge tenía tan solo 18 años, y se mantuvo detenido en la cárcel aproximadamente tres semanas.

Al punto segundo declaró que, respecto de las secuelas físicas, en la actualidad don Jorge posee dificultades para caminar, tiene sordera tras la afectación en sus oídos, producto de las golpizas recibidas. Requiere de apoyo para poder movilizarse, y siempre anda con miedo de salir a la calle. Indica que le afectó en la calidad del sueño, ya que sufre de pesadillas reiteradas. Luego de la tortura, no pudo retomar sus estudios, ya que tuvo que trabajar para mantener a su madre y hermanos menores, tras ser enviado al exilio su padre.

SEXTO: En orden a cuantificar el daño y regular el monto de la indemnización, cabe realizar la ponderación, teniendo en primordial consideración las consecuencias psicológicas y emocionales de los hechos lesivos que sufrió el demandante a causa del actuar de los agentes estatales; y para ello resulta necesario tener presente que la acción civil deducida en contra del Fisco de Chile tiene por objeto obtener la íntegra reparación de los perjuicios ocasionados por dicho actuar, lo que resulta plenamente procedente, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación



de normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.

De esta forma, se determinará la indemnización pretendida por el actor, por el sufrimiento moral, en la suma de \$70.000.000.-, poniendo especial atención en que se trataba de un joven de 18 años cuando ocurrió la detención, apremios ilegítimos y tortura, dejando una huella imborrable, con secuelas permanentes, según se lee del documento suscrito por la profesional del PRAIS.

En efecto, al tratarse de una persona, quien por su corta edad (nació el 25 de junio de 1955 según se lee de su certificado de nacimiento acompañado junto a la demanda), se encontraba en proceso de formación educativa y social, en una etapa de grandes cambios y descubrimientos, donde así como es posible fortalecer los factores protectores de salud y vida con el fin de alcanzar el máximo potencial de crecimiento y desarrollo, también es posible truncar esas posibilidades en una etapa fundamental que ya de adulto no resulta posible mutar, considerando que la edad de 18 años en la época en que fue víctima de detenciones y torturas no puede ni debe soslayarse.

Conforme a lo expuesto, la vulneración a los derechos humanos de quien fue detenido y torturado siendo un adolescente reviste una entidad mayor en quien la sufre, lo que se desprende del cuidado especial que tanto la normativa nacional (con legislación y tribunales especializados) como internacional (con la Convención de Derechos del Niño como norma rectora) otorgan de manera preferente a niñas, niños y adolescentes.

SÉPTIMO: Las demás pruebas acompañadas en nada alteran las conclusiones ya arribadas por esta sentenciadora.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 160, 170, 341 y siguientes y 748 a 752 del Código de Procedimiento Civil y 1698 y 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:

1. Que se rechazan las excepciones de reparación y prescripción opuestas por el Fisco de Chile.
2. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena al Fisco de Chile al pago de una indemnización por el daño moral sufrido por don **Jorge Luis Heinsohn Huala**, la que se fija en la suma **de \$70.000.000.- (setenta millones de pesos)**, más reajustes e intereses desde que quede ejecutoriada la sentencia, sin costas.

Regístrese y notifíquese por cédula a los abogados de las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 48 inciso 3° del Código de Procedimiento Civil.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>


Código: GGFNXTHTXXJ

Consúltese si no se apelare.


Rol C-1762-2024

Dictada por Marcela Robles Sanguinetti, Jueza Titular del Segundo Juzgado Civil de Valdivia.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Valdivia, catorce de marzo de dos mil veinticinco.**



Marcela Alejandra Robles Sanguinetti
Juez
PJUD
Catorce de marzo de dos mil veinticinco
12:12 UTC-3





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: GGFNXTHTXXJ